RAZÓN DE CUENTA. EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PUEBLA, A **ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE**, LA SUSCRITA SECRETARIA DE ACUERDOS ABOGADA **MARIA DEL PILAR LOEZA GONZÁLEZ** ENCARGADA DE LOS EXPEDIENTES IMPARES, ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, DA CUENTA A LA CIUDADANA JUEZ CON EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN QUE EN DERECHO CORRESPONDE. CONSTE.

**ABOGADA MARIA DEL PILAR LOEZA GONZÁLEZ.
SECRETARIA IMPAR.**

**PROCEDIMIENTO FAMILIAR PRIVILEGIADO.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR.
EXPEDIENTE NÚMERO: -----/2018.
JUICIO: GUARDA Y CUSTODIA.
ACTOR: -----.
DEMANDADA: -----.**

EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI PUEBLA, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

VISTOS los autos del expediente número -----/2018, para resolver en definitiva el **JUICIO PRIVILEGIADO DE GUARDA Y CUSTODIA** promovido por -----, respecto de los menores de nombres **XXXXX y XXXX**, a quienes en atención a la a la protección de sus datos personales y del derecho a la intimidad de los infantes, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracción XVII, 7, 86 fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se les denominará -----, y -----, en contra de -----; se tuvo a las partes designando abogado patrono, y señalando domicilio para recibir notificaciones el señalado en autos; y:

R E S U L T A N D O

1. Que mediante escrito presentado en la Oficialía Mayor de este Juzgado el **once de julio de dos mil dieciocho**, -----, **promovió JUICIO PRIVILEGIADO DE GUARDA Y CUSTODIA** con respecto de los menores de nombre -----, Y -----, en contra de -----, en los términos que de su escrito se desprenden.
2. Por auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda interpuesta, ordenándose emplazar a la parte demandada; asimismo, se le tuvo ofreciendo las pruebas de mérito.
3. Previo emplazamiento de ley, se le tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda en **tres de octubre de dos mil dieciocho**, procediéndose a señalar día y hora para el desahogo del material probatorio ofrecidas por las partes.
4. El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, ----- presentó incidente penal, mismo que fue admitido el once de diciembre del dos mil dieciocho, tras la secuela procesal el catorce de marzo de dos mil diecinueve se desahogó la audiencia incidental.
5. En diligencia de **cinco de diciembre de dos mil dieciocho**, se desahogaron las pruebas y se escuchó a los menores -----, y -----
6. El doce de marzo de dos mil diecinueve las partes realizaron un convenio provisional de visita y convivencia, finalmente se ordenó turnar los autos a la

vista de la suscrita Juez a fin de dictar la resolución que conforme a derecho corresponda, misma que se dicta en los siguientes términos:

CONSIDERANDO

- I. Dispone el artículo 14 Constitucional, en concordancia con lo regulado por el diverso 361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y que solo a falta de esta se podrá fundar en los principios generales del derecho.
- II. Esta Autoridad es competente para conocer y fallar el presente negocio jurídico en términos de lo dispuesto por el artículo 108 fracción XIII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y 40 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
- III. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 353 del Código Estatal de Procedimientos Civiles, este Tribunal estima que se encuentran satisfechas las condiciones generales y los presupuestos procesales a que hacen referencia los numerales 98 y 99 de esta ley, sin que se aprecien violaciones cometidas en el procedimiento que afecten la defensa de las partes pues se encuentran legalmente emplazados los interesados y la litis fue debidamente integrada.
- IV. Atendiendo a que se encuentra formado un incidente penal, en términos del artículo 353 del Código Procesal de la materia, se procede a resolver en primer término el incidente de mérito y con posterioridad la acción principal, en los siguientes términos:

En términos de lo que señala el diverso 413 de la Ley del enjuiciamiento civil, se llaman incidentes las cuestiones que se promueven en el trámite del juicio que tienen relación inmediata con el negocio en lo principal.

Que el incidentista ----- expresó como hechos constitutivos de su acción exponiendo los puntos de hechos y derecho que considero pertinentes, que se exponen sintetizadamente:

“Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, este Honorable Juzgado Primero de lo Familiar a través de la Ciudadana Diligenciaría adscrita de los expedientes impares, hace constar la comparecencia voluntaria de la c. -----, y en ese momento se le notifica personalmente le acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho.”

“Hago del conocimiento de esta autoridad jurisdiccional que durante la tarde del mismo día diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho la señora ----- comenzó a difundir a través de las redes sociales el reporte de la desaparición de mis menores hijos de nombres -----, Y -----, en contra de -----, para lo cual a los mensajes relativos a dicha desaparición acompañó fotografías en blanco y negro de dichos menores, conformando panfletos encabezados por la leyenda “SE BUSCAN”.

“Esta información falsa respecto a la supuesta desaparición de mis menores hijos fue difundida por la señora ----- a pesar de que ella tenía pleno conocimiento del paradero de los menores, por lo que esta acción irresponsable e irracional de parte de ella ocasionó que se pusiera en riesgo la integridad física del suscrito, de mis padres y de mis menores hijos, debido a las potenciales reacciones agresivas y violentas que pudieron haber adoptado las personas ingenuas que pudieron haber considerado el hecho de que el suscrito mantuviera a mi lado a mis menores hijos como una supuesta “desaparición”, “robo” e incluso “secuestro”, lo cual expone en una situación de peligro latente al ser considerado ante los familiares, amigos y conocidos de la señora ----- como un presunto delincuente. Esta situación fantasiosa ilusoria e inexistente de la supuesta desaparición de mis menores hijos, por desgracia no ha sido desmentida ni aclarada por su señora madre, por lo que los riesgos en contra de mi persona siguen vigentes. Esto lo señalo debido a través de diversas personas me he llegado a enterar que algunos de los familiares, amigos y conocidos de la señora ----- han manifestado que acudirían al lugar donde realizo mis actividades laborales para agredirme y golpearme debido a que me hacían responsable de haberle “robado” a los menores.”

Ahora bien, antes de entrar al fondo del asunto, procede a estudiar de oficio la procedencia de la acción, sirve de apoyo la Jurisprudencia consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo IV. Civil. Tesis 6. Página 6, bajo el rubro y texto: "**ACCION. ESTUDIO**

OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA", que a la letra dice: "La improcedencia de la acción, por falta de uno de los requisitos esenciales, puede ser estimada por el Juzgador, aun de oficio por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción".

Y la tesis localizada en la Novena Época, Registro: 191148, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, Materia(s): Civil, Tesis: VI.3o.C. J/36, Página: 593, bajo el rubro: **"ACCIÓN. LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA SU PROCEDENCIA, DEBEN SER ANALIZADAS DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).**- *Es verdad que el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, establece determinados requisitos formales que deben cumplirse cuando se ejercita una acción, independientemente de cuál sea ésta (dicho precepto legal estatuye: "Al ejercitarse una acción, se determinará con claridad la prestación que se exige, el título o causa de la acción y la disposición legal aplicable."). El cumplimiento de tales condiciones, debe ser analizado por el juzgador a fin de determinar la admisión o desechamiento de una demanda. Sin embargo, los citados requisitos formales no son los únicos que deben ser analizados oficiosamente por el juzgador para determinar la procedencia de la acción, pues al momento de fallar, los órganos jurisdiccionales comunes pueden estimar, aun de oficio, tanto los presupuestos procesales como las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. Ahora bien, independientemente de las condiciones que deben satisfacerse para el ejercicio de cualquier acción civil, la ley de la materia establece también condiciones para la procedencia de las acciones en particular; estas condiciones especiales deben ser estimadas de oficio por el juzgador, en los términos del artículo 456 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en relación con la jurisprudencia número 3, visible a foja 11, de la Cuarta Parte, Tercera Sala, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.", pues es obvio que para declarar probada una acción, deben analizarse, tanto las condiciones generales y especiales para su ejercicio, como sus elementos constitutivos."*

Una vez realizado el estudio de la procedencia del presente INCIDENTE PENAL, se advierte que este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido para entrar al fondo de dicha incidencia, de conformidad con los siguientes razonamientos.

Por principio de autos debe referirse que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla que entro en vigor a partir del día uno de enero de dos mil cinco, que resulta aplicable al caso concreto no regula la tramitación y efectos del Incidente Penal o Criminal por lo que para dirimir la controversia deberá atenderse de conformidad por lo dispuesto por los artículos 413 y 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado en vigor, a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia; y a la costumbre, tal y como lo ha establecido nuestro mas alto Tribunal en la tesis siguiente:

No. Registro: 301,701
Tesis aislada
Materia(s): Penal
Quinta Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
XCVIII
Tesis:
Página: 2038

INTERPRETACION DE LA LEY, REGLAS DE LA.

Ante la ineludible necesidad de interpretar contenidos y alcances de leyes en pugna, hay que ocurrir, por exclusión y en su orden rigurosamente jerárquico, a las cuatro grandes fuentes de la interpretación legal: a) a la fuente "auténtica", que es aquélla en donde el legislador expresa de manera concreta su pensamiento y su voluntad; b) a falta de ella, a la fuente "coordinadora", buscando una tesis que haga posible la vigencia concomitante y sin contradicciones de los preceptos en posible antítesis; c) a falta de las dos; a la fuente "jerárquica", en donde, al definirse el rango superior, ético, social y jerárquico, de una ley sobre la otra, se estructura, de acuerdo con aquélla, la solución integral del problema; d) y a falta de las tres, a la fuente simplemente "doctrinal" que define cual de las disposiciones a debate ha de conservar la vigencia, por su adecuación a los principios generales del derecho, a la filosofía y a las corrientes del pensamiento contemporáneo jurídico-penal.

Amparo penal directo 2877/46. Palma Moreno Guillermo. 23 de Agosto de 1948. Mayoría de tres votos. Disidentes: Carlos L. Angeles y José Rebolledo. La publicación no menciona

el nombre del ponente.

De igual manera la siguiente tesis jurisprudencial aplicable por analogía al caso establece:

No. Registro: 208,460

Tesis aislada

Materia(s): Civil

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XV-II, Febrero de 1995

Tesis: VI.1o.144 C

Página: 359

INCIDENTE PENAL EN JUICIOS CIVILES. ES IMPROCEDENTE SI SE TACHA DE FALSO UN DOCUMENTO DERIVADO DE UN EXPEDIENTE DIVERSO.

De una interpretación lógico jurídica de los artículos 635 y 636 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se desprende que el incidente penal procede en los juicios civiles, sólo cuando en el procedimiento de estos juicios, en los cuales se promueva dicho incidente, surja un acto o se ofrezca una prueba, que se estimen como hechos delictuosos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 370/88. Carlos Pérez Allende. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.

De donde se deduce que el Incidente Criminal tiene como fin primordial impugnar de falso una prueba o una actuación judicial que se considera delictiva para el efecto de que ésta no sea tomada en consideración al momento de dictarse la sentencia definitiva; dejando a salvo los derechos del actor Incidentista para que de considerar que existe delito lo denuncie en la vía y forma correspondiente; y que este Incidente únicamente puede hacerse valer en contra de actuaciones judiciales o documentos posteriores al escrito de demanda y de contestación de demanda en virtud de que de lo alegado en el acto urigénico de la acción y de los documentos fundatorios que se acompañan, la demandada incidental tiene el derecho al dar contestación a la demanda de objetar en cuanto a su valor y alcance jurídico como materia de excepción aportando todas las pruebas que tenga para acreditarlo y lo que desde luego será materia de estudio de la sentencia definitiva o interlocutoria que en su caso se pronuncie al tener el derecho de réplica respecto de éstos en la contestación; lo mismo ocurre para el actor incidental quien goza de ese derecho de objeción cuando se le da vista con la contestación de demanda y las pruebas aportadas para objetar, señalando con precisión la causa en que lo funda y aportando las pruebas para demostrarlo.

Es por ello que si del testimonio de constancias que constituyen el antecedente del juicio, las cuales dadas su naturaleza tienen valor probatorio en términos de los artículos 267 Fracción VIII y 336 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado en vigor se desprende que el actor incidental ----- pretende hacer valer el Incidente Penal en base a la actuación de la señora -----, al decir que la demandada tanto en lo principal como en lo incidental compartió en las redes sociales la supuesta desaparición de sus menores hijos, ocasionando con ello que se pusiera en peligro tanto al actor como a sus familiares, sin embargo como se ha mencionado, el incidente penal tiene como finalidad impugnar de falso una prueba o una actuación judicial que se considera delictiva para el efecto de que ésta no sea tomada en consideración al momento de dictarse la sentencia definitiva.

De ahí que dicho incidente resulta improcedente.

De igual manera resulta improcedente el incidente a estudio, dado que desde el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el actor tuvo conocimiento de los hechos que refiere y que se pretende impugnar.

Lo anterior se establece así, dado que de la foja dos del incidente en cuestión refiere el incidentista:

“Hago del conocimiento de esta Autoridad Jurisdiccional que durante la tarde del mismo día diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la señora ----- comenzó a difundir a través de las redes sociales el reporte de la desaparición de mis menores hijos de nombres -----, Y ----- en contra de -----, para lo cual los mensajes relativos a dicha desaparición acompañó fotografías en blanco y negro de dichos menores conformando panfletos encabezados por la leyenda “SE BUSCAN”.

Lo anterior tiene relevancia, puesto que el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado establece:

“Artículo 414

Los incidentes cualquiera que sea su naturaleza se tramitarán:

I. Por escrito, pudiendo ofrecer las pruebas que tengan relación con la cuestión incidental;

II. En cuerda separada y sin suspensión del procedimiento;

III. Dentro de tres días siguientes a que tenga conocimiento del hecho que los motiva;

IV. La parte contraria dentro del mismo término, podrá contestarlo ofreciendo su material probatorio;

V. Transcurrido el término, se señalará día y hora para una audiencia indifferible, en la que se desahogarán las pruebas que así lo ameriten y aleguen las partes lo que a su derecho convenga, y

VI. El Tribunal dictará la resolución conducente, y contra ésta no procede recurso.

De la recta interpretación del precepto legal invocado, se desprende que los incidentes, cualesquiera que sea su naturaleza como en el caso a estudio de nulidad de notificaciones, se interpondrán dentro de los tres días siguientes a que se tenga conocimiento del hecho que se plantea en la demanda incidental.

De ahí que al haber manifestado que el día diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la señora ----- comenzó a difundir a través de las redes sociales el reporte de la desaparición de sus menores hijos, tiene como consecuencia que ha fenecido el término para el ejercicio incidental, dado que el actor incidental confiesa que desde la fecha señalada con antelación tuvo conocimiento del juicio, y dado que en términos del Artículo 246 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, los hechos afirmados por alguna de las partes en escrito o actuación, ante cualquier autoridad jurisdiccional, siempre probarán en su contra, sin que pueda rendir material de convicción en contrario, de ahí que se tenga por cierto que tuvo conocimiento de las manifestaciones de la demandada en redes sociales desde el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, siendo que presentó el incidente a estudio el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

Ello, en virtud de que la Legislación poblana establece los términos que deben concederse para el ejercicio de alguna acción, con la finalidad de que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, permitiendo a las partes que ofrezcan las pruebas que estimen conducentes así como el desahogo de las mismas para cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado, y para ello se establecen los términos que se otorgan a las partes para hacer valer su derecho a inconformarse, teniendo aplicación la Jurisprudencia consultable al rubro **“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”**

Consecuentemente la acción del incidente penal resulta improcedente y por ende se procede al estudio del fondo del asunto principal en los siguientes términos:

En términos de los artículos 230 y 352 de Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la presente sentencia tratará tanto de la acción deducida por la parte actora como de las excepciones que opuso la parte demandada; por lo que la parte actora deberá justificar los hechos constitutivos de su acción, precisándose que de no cumplir con tal imperativo será absuelta la parte demandada.

- V. En cumplimiento a lo ordenado por el dispositivo 357 fracción III de la Ley Procesal de la Materia, en relación con las actuaciones judiciales que integran la pieza de autos en estudio, la parte actora ----- en su escrito inicial plantea los siguientes hechos:

“En el año de dos mil ocho mi hoy demandada fue a estudiar a la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Ciudad de Toluca, estudiando la maestría en Ciencias Agropecuarias y recursos Naturales, ya que fue becada por esta Universidad, y su servidor me tenía que hacer responsable de mi hija mayor, ausentándose por tres años en su totalidad, ya que me decía que ella se merecía una vida más digna y que necesitaba realizar esos estudios para que podamos vivir mejor, pero es el caso que hoy a pesar del grado de estudios dice ella que ya no quiere trabajar.”

“Al mismo tiempo hago del conocimiento de su Señoría que en el mes de junio del año dos mil dieciocho, la hoy demandada se fue con su familia a la Ciudad de Teziutlán, ya que se enojó porque le reclame por no llevar a mis hijos a la escuela y que tenían demasiadas faltas a lo que ella me contestó que por esa razón ella justificaba las faltas en la escuela, además porque vestía a mi hijo de nombre -----, como mujer con todo y peluca de mujer y de subirlas a sus redes sociales exhibiendo a mi menor hijo, pero ella siempre me tira de a loco y me amenaza con llevarse a mis menores hijos y yo no los volvería a ver nunca en mi vida, regresando después de unos días a nuestra casa, en varias ocasiones la mamá de mis hijos abandonado a mis menores hijos y que no es la única ocasión que lo hace.”

“No obstante lo señalado en el punto que antecede, el suscrito tengo temor que la demandada no cumpla con el acuerdo verbal al que llegamos en el mes de junio del año dos mil dieciocho y se lleve por la fuerza a mis hijos nuevamente a vivir con ella. (sic).”

La parte demandada ----- al dar contestación a la demanda, manifestó en síntesis como hechos los siguientes:

“1.- Contestación al punto número 1 del capítulo de hechos de la demanda que se contesta he de decir a usted ciudadano juez que es falso.”

“2.-El correlativo que se contesta es falso en cuanto hace que nuestros hijos nacieron en unión libre siendo que únicamente mi hijo -----, nació dentro del concubinato.”

“3.-El correlativo que se contesta el punto tercero de hechos de la demanda en contra debo decir que es parcialmente cierto debido a que efectivamente teníamos conflictos constantes, pero estas no eran por ningún engaño de la suscrita si no por los celos enfermos y control posesivo que el padre de mis hijos quería ejercer sobre mi.”

“4.- El correlativo que se contesta es falso, ya que siempre he estado al pendiente de mis hijos.”

“5.- El correlativo que se contesta es falso.”

“6.- El correlativo que se contesta es parcialmente cierto, por cuanto hace al acuerdo verbal entre el actor y la suscrita, acuerdo como se menciona en el punto 6 de hechos desde el 4 de abril del 2018, que fue de la casa a la fecha en que ----- se llevó a mis hijos, esto es el día 16 de septiembre de este año, habíamos acordado llevar a los menores a convivir con la familia de él, con ventaja que tenía en la casa de sus padres logró sustraer a los menores sin mi consentimiento.”

“7.- El correlativo que se contesta es falso.” (sic).

VI. Planteada la materia del debate, de constancias se desprende que la parte actora acompañó en su escrito inicial de demanda las pruebas que en su oportunidad se admitieron y desahogaron y las cuales enseguida se describen y valoran:

A) LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las **actas de nacimiento de los niños de nombres -----, y -----, expedidas por Juez del Registro Civil de Teziutlán Puebla, y Juez Cuarto del Registro Civil de las Personas de Puebla, Puebla;** documentales que en términos de los artículos 265, 266, 267 fracción VI y 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, al constituir la probanza un elemento que por su naturaleza objetiva consigna la memoria de un hecho, en el que se hace constar por funcionario dentro de los límites de su competencia, la certificación existente en los libros de la dependencia a su cargo, aunando a que no fue objetada por la parte contraria en consecuencia, tiene valor de prueba plena, y de las que se desprende que las partes en el juicio ejercen la patria potestad de sus menores hijos -----
-. y -----

B) LA DOCUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las actuaciones practicadas, mismas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 336 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

C) LA TESTIMONIAL. A cargo de XXX y XXXX, probanza que carece de valor y eficacia demostrativa, al no reunir los requisitos previstos en las fracciones II, III y IV del artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que los testigos omitieron inferir con claridad y precisión las circunstancias en que a su decir ocurrieron los hechos que supuestamente conocen, toda vez que resultan vagos e imprecisos, puesto que los narraron en forma general, dado que no manifiestan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos que depusieron, asimismo no refieren la forma en que presenciaron los hechos materia de la presente probanza, Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado bajo el siguiente rubro:

Novena Época
Registro: 194184
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo : IX, Abril de 1999
Materia(s): Común
Tesis: I.8o.C.26 K
Página: 591

PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN.

Aunque el valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que por el hecho de que los testigos fueron uniformes en sus declaraciones sobre determinado hecho, tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas; que expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 564/98. Josefina Gutiérrez viuda de Chong y Dora Iliana Chong Gutiérrez. 30 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 759, tesis I.8o.C.58 C, de rubro: "TESTIMONIAL. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA".

d) LA DECLARACIÓN DE PARTE SOBRE HECHOS PROPIOS Y AJENOS. A cargo de la demandada ----- y dado que a la diligencia de cinco de diciembre del dos mil dieciocho no compareció a pesar de estar debidamente notificada para ello, se le hizo efectivo el apercibimiento hecho por auto de fecha tres de agosto del dos mil dieciocho, teniéndose por contestadas las preguntas en sentido afirmativo y por existente una razón fundada de su dicho.

Sin embargo, dicha probanza tiene valor probatorio de indicio en términos de lo dispuesto por el artículo 333 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, toda vez que no existe probanza con la que pueda concatenarse, dado que de la narración de los hechos de la demanda, el actor refiere que la

enjuiciada estuvo estudiando la maestría y por lo tanto éste tuvo que quedarse al cuidado de los hijos, de ahí que el hecho de haber salido del domicilio para estudiar, no es una causa de abandono, máxime que el mismo actor tenía conocimiento de ello y lo consintió.

Ahora bien, de las anteriores probanzas valoradas, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciándose discrecionalmente el valor de las presunciones humanas y procurando que la verdad real prevalezca sobre la verdad formal; esta autoridad llega a la conclusión que la parte actora **no probó su acción**, por las razones y fundamentos legales siguientes:

En principio, debe decirse que el artículo 290 del Código Civil para el estado, establece que las Leyes Civiles del estado son protectoras de la familia y del estado Civil de las Personas y el diverso 293 señala que los negocios familiares se resolverán atendiendo preferentemente al interés del menor o mayores incapaces o discapacitados, si los hubiere en la familia de que se trate, en caso contrario se atenderá al interés de la familia misma.

Asimismo, debe decirse que la institución jurídica de custodia de un menor descansa en el derecho de patria potestad de quien la ejerce sobre dicho menor, esto, en términos del artículo 597 del Código Civil que determina que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que recíprocamente tienen, por una parte el padre y la madre, y por otra los hijos menores no emancipados y cuyo objeto es la guarda de la persona y bienes de éstos menores así como su educación.

Por otra parte, en atención a que la parte actora reclama para sí la guarda y custodia respecto de los niños -----, y -----, siendo que la demandada es la madre de los menores en cuestión y quién ejerce legalmente la guarda y custodia de éstos, es por lo que se debe atender el contenido del artículo 569, 572, 598, 600, 634, 635 y 636 del Código Civil para el estado que determina:

Artículo 569.- Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al mismo tiempo al o los hijos, convendrán cuál de los dos ejercerá la guarda y custodia de éste, y con quién de ellos habitará; y si no se ponen de acuerdo sobre estos puntos, se observará lo que disponen los artículos 635 y 636 de este Código.

Artículo 572.- Si la madre ha cuidado de la lactancia del hijo, le ha dado su apellido o permitido que lo lleve y ha proveído a su educación y subsistencia, no se le podrá separar de su lado a menos que ella consienta en entregarlo o lo ordene una sentencia ejecutoriada.

Artículo 598.- La patria potestad se ejerce por el padre y la madre conjuntamente, o por el supérstite cuando uno de ellos haya muerto.

Artículo 600.- Los menores sujetos a patria potestad, tendrán derecho a vivir con el ascendiente o ascendientes que la ejerzan y a convivir con su padre y con su madre, aún en el caso de que estos no vivan juntos, por lo que el Juez deberá tomar siempre las medidas necesarias para proteger los derechos de convivencia.

Artículo 634.- El Juez puede en beneficio del menor modificar el ejercicio de la patria potestad o custodia cuando la tenga decretada judicialmente, ya sea provisional o definitiva sobre ellos, cuando quien la ejerce realice conductas reiteradas para evitar la convivencia del menor con la persona o personas que tengan reconocido judicialmente su derecho a la misma.

Artículo 635.- La ley reconoce el derecho de convivencia que tienen los menores con sus padres y con las familias de ambos. La convivencia permite el conocimiento directo de los menores con sus ascendientes y demás parientes, a fin de lograr su integración al núcleo familiar y obtener la identidad plena de los menores en el grupo social a que pertenece. La custodia puede establecerse de manera compartida y mediante ella se determinan derechos iguales de convivencia en favor de los menores con sus padres y demás familiares. Cuando conforme a este Código deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda de un menor, uno sólo de los padres, se aplicarán las siguientes disposiciones: I.- El padre y la madre convendrán quién de ellos ejercerá la guarda, poniendo a los hijos a cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, debiendo ser uno de estos y pudiéndose compartir la custodia, en los tiempos libres de los menores, al otro que no tenga dicha custodia. Las obligaciones de formación cultural y educativa, corresponde a ambos padres, quienes podrán acordar formas de colaboración para alcanzar dicho objetivo; II.- Si los padres no llegaran a ningún acuerdo, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, previo el procedimiento que fije el Código Procesal, tomando en cuenta la opinión del menor. **Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre.** No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca

de recursos económicos, y III.- En caso de divorcio necesario se estará a lo que disponga la sentencia que lo decreta.

Artículo 636.- Lo dispuesto en el artículo anterior no impide al Juez encomendar en cualquier momento la custodia o guarda de los menores a los abuelos, tíos, hermanos mayores u otros parientes interesados, cuando ello sea conveniente para los menores mismos. Los parientes a los que por cualquier circunstancia se otorgue la custodia o guarda de un menor, tendrán las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores. La guarda a que se refiere este artículo podrá terminar por resolución judicial, en la que se resuelva nuevamente quién o quiénes deberán hacerse cargo del menor.

Asimismo, deberá tomarse en cuenta, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes vigente a partir del tres de junio del año dos mil quince; que en su artículo primero y séptimo establece que las disposiciones de dicha Ley son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y que tiene por objeto garantizar a las niñas, niños y adolescentes, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Ésta establece en su artículo 4, que el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos, niños, niñas y adolescentes. Por su parte el artículo 2, prevé la obligación para las autoridades, la de asegurar a los menores la protección y el ejercicio de sus derechos; tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos.

El cuerpo de leyes en cita determina como obligaciones de madres y padres, las de proporcionarles a los niños y adolescentes una vida digna, protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño o agresión, abuso, trata y explotación; lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia, no podrán ejercerla atentando contra la integridad física o mental ni actuar en menoscabo del desarrollo del menor; estableciendo las condiciones que permitan el sano crecimiento.

Por ende, esta autoridad está obligada a tener especial cuidado al resolver cuestiones de guarda y custodia; buscando que éstos se desarrollen en un ambiente que permita su crecimiento integral físico y psíquico, atendiendo siempre al interés superior de la infancia, siendo también obligación de esta autoridad que una vez dictada la resolución, supervisar que las referidas convivencias, se desarrollen en un ambiente confortable, a fin de que no se le cause un daño psicológico o físico y en caso de no ser favorables estar en la posibilidad de revocar o modificar tales resoluciones.

Ahora bien, se tiene por acreditado que los controvertidos ----- y -----, son progenitores de los menores -----, y -----, tal y como se justifica con sus actas de nacimiento en razón de que los mismos comparecieron a declarar sus nacimientos, de igual forma consta en actuaciones que dichos menores cuenta con catorce y siete años de edad respectivamente y que viven con su progenitor -----.

Sin embargo, también se desprende de la declaración de los menores -----, y -----, que obra a fojas ciento cincuenta y seis frente y vuelta, que el actor tiene la posesión de sus menores hijos ilegalmente, dado que los niños refieren que su papá ya no los devolvió con su mamá después de regresar de Guanajuato, aunado a que no existe en actuaciones probanza alguna de que la demandada le haya entregado a sus menores hijos de manera voluntaria.

Máxime que de los hechos del actor se desprende que éste refiere que que la demandada se ausentaba del domicilio familiar para ir a estudiar el nivel maestría, entonces dicha ausencia es justificada, dado que la mujer tiene derecho para salir a prepararse, puesto que ello será en beneficio de la familia, aunado a que el actor lo consintió, tan es así que refiere se quedó al cuidado de sus menores hijos.

Entonces, del material probatorio no se demuestra que existe una situación que les pueda causar a dichos infantes algún perjuicio en su derecho a la vida, integridad física y mental, salud e identidad, entre otros, dado que del material probatorio valorado en el cuerpo de esta resolución no lo justifica.

Consecuentemente, esta autoridad en apego a que uno de los principios fundamentales que rige la materia familiar es de atender al interés preferentemente de los niños en base a lo que señala la propia Constitución en su artículo 4° y con fundamento en los artículos 290, 291 293, 605, 635, del Código Civil, la suscrita determina declarar no probada la acción de guarda y custodia de los niños ----- y ----- dado que no solo debe considerarse las pruebas ofrecidas por el actor con las que pretendan demostrar una adecuada capacidad para el cuidado de unos menores de edad, sino el cúmulo de actuaciones que obran en el expediente, es por ello que la suscrita consideró el interés superior de los niños ----- y -----, como presupuesto esencial para resolver el presente asunto.

A mayor abundamiento, en términos del artículo 230 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la parte actora debe probar los hechos constitutivos de la acción, sin embargo en el presente caso no se encuentran acreditados dichos extremos, pues incluso se suplió las deficiencias de la demanda al proveer sobre los documentos exhibidos, dado que la demanda carece del capítulo de pruebas, no obstante de ello, dichas probanzas son insuficientes para otorgar la guarda y custodia al actor, máxime que los niños ----- y -----, refirieron que les gustaría vivir con su mamá y con su papá, sin que exista en actuaciones que la enjuiciada sea una persona nociva para dichos menores de edad.

Aunado a lo anterior, si bien ya lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellas disposiciones legales en las cuales se establece una preferencia para que la madre tenga la guarda y custodia de sus menores hijos, deben preservar el interés superior del menor, toda vez que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores para el cuidado de los hijos pues, en principio, **tanto la madre como el padre están igualmente capacitados para atenderlos debidamente**; así las cosas, ante la separación de los progenitores, deberá de atenderse no sólo al menor perjuicio que se le pueda causar al menor, sino al mayor beneficio que se le pueda generar. En consecuencia, si bien el legislador del Estado estableció una preferencia de que la madre detente la guarda y custodia, el juzgador deberá valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para un clima apto para el sano desarrollo, educación, corrección, vigilancia y asistencia de salud, sin embargo como se ha establecido, no existe en autos probanza alguna que justifique que los menores de edad ----- y -----, no deban estar bajo el cuidado de su progenitora, pues el solo dicho del actor no es suficiente para acreditar su acción, dado que la guarda y custodia es un derecho de los menores y su modificación, pérdida, limitación, o cualquier otra parecida, se encuentran tuteladas por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que deben otorgarse las formalidades de un procedimiento, pues la actitud procesal de los padres pudiera repercutir en el ejercicio de un derecho de los menores, en ese sentido para desprender a los menores ----- y -----, del cuidado de su progenitora, debe analizarse el escenario que resulta más benéfico para el desarrollo integral de dichos menores, de lo contrario se estaría sancionando por una conducta que la enjuiciada no cometió.

Teniendo como precedente la siguiente tesis de Jurisprudencia:

Época: Décima Época
Registro: 2017901
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Civil
Tesis: VII.2o.C.156 C (10a.)
Página: 2373

GUARDA Y CUSTODIA. LAS RESTRICCIONES O MODIFICACIONES DE LOS DERECHOS DE UN MENOR NO PUEDEN RESULTAR DEL INCUMPLIMIENTO A UN MANDATO PROCESAL DE LOS PADRES, YA QUE EN LA DETERMINACIÓN DE AQUÉLLA, DEBE ANALIZARSE EL ESCENARIO

QUE RESULTA MÁS BENÉFICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INFANTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

La guarda y custodia es un derecho del menor y su modificación, pérdida, limitación, o cualquier otra parecida, se encuentran tuteladas por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que deben otorgarse las formalidades de un proceso cautelar o principal para afectar los derechos de un menor. Así, si bien pueden producirse situaciones al amparo de un proceso familiar en las cuales, la actitud procesal de los padres pudiera repercutir en el ejercicio de un derecho de los menores; lo cierto es que las restricciones o modificaciones de los derechos de los menores no pueden resultar del incumplimiento a un mandato procesal, ya que en la determinación de la guarda y custodia, debe analizarse el escenario que resulta más benéfico para el desarrollo integral del menor, de lo contrario se le estaría sancionando por una conducta que él no cometió, y se soslayarían las particularidades que el interés superior del menor demanda se tomen en consideración al momento de decidir sobre la guarda y custodia, puesto que no por el hecho de que un padre incumpla con un mandato procesal que se vincule a los derechos de aquél, conlleva que éste no sea el mejor escenario para él, porque ello debe determinarse del examen integral y comparativo de las circunstancias en que éste se halle. Por lo que la facultad atribuida al juzgador en el último párrafo del artículo 346 del Código Civil para el Estado de Veracruz, no es complementario del artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para la misma entidad, sino de los procedimientos cautelares, incidentales y/o principales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 95/2018. 14 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Alan Iván Torres Hinojosa.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

De ahí que al no haberse justificado los hechos constitutivos de la acción, ni que la demandada sea una persona nociva para su menor hija, se declara no probada la acción de guarda y custodia ejercitada por -----, consecuentemente resulta innecesario entrar al estudio de las excepciones opuestas.

Sin embargo, considerando que en los asuntos en donde se encuentran involucrados los derechos de un menor de edad, es razón suficiente para estimar que debe atenderse a la figura jurídica de la SUPLENCIA DE LA QUEJA, lo que en el particular se actualiza, en virtud de que en la actualidad los menores -----, y ----- cuentan con las edades de catorce y siete años.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XII, Julio de 2000. Pág. 161. Tesis Aislada, bajo el rubro siguiente: **“MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.”**

En concordancia con lo anterior, debe decirse que el interés superior de la infancia, es un principio de rango constitucional que obliga a las autoridades del Estado, a los ascendientes, tutores y custodios, e incluso a toda la sociedad a vigilar, preservar y exigir que cualquier decisión que se tome en torno a un menor de edad, sea acorde a lo que más le convenga, propiciando de esa manera no sólo el respeto a su dignidad, sino además el ejercicio pleno de sus derechos.

En ese orden de ideas, para resolver cualquier controversia en la que se ve involucrado un menor de edad, el juzgador en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º Constitucional, debe tomar conciencia de que los menores, debido a su falta de madurez, son seres vulnerables que requieren de una protección legal reforzada, a fin de hacer que alcancen su mayor y mejor desarrollo a través del respeto de sus derechos y por ende, de su dignidad, ya que ésta es la base de ellos.

Por lo tanto, al resolver cualquier controversia que incide sobre la guarda y custodia de un menor, no basta que el juzgador en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º Constitucional, tenga presente cuales son los derechos que la Constitución, los Tratados Internacionales y las legislaciones ordinarias reconocen a su favor, sino que además es preciso que esos derechos se interpreten y apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las

prioridades del infante, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son el físico, el mental, espiritual, moral psicológico y social, por lo tanto, el Juzgador debe poner el mayor empeño en discernir que es lo que mas conviene al menor, viendo su situación no solo al momento presente, sino mas bien a futuro.

Entonces, el sentido del fallo, no impide a esta autoridad, adentrarse al análisis de la guarda y custodia de los menores de edad que intervienen en este procedimiento, pues debe prevalecer, como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social.

En ese entendido, las actuaciones judiciales revelan, que ambos padres se encuentran en igualdad de circunstancias para ejercer la guarda y custodia de los niños sujetos a la patria potestad, pues se reitera, no fueron probadas las circunstancias en que el actor se fundó para que se decretara la guarda y custodia a su favor. Al contrario, obra en autos el análisis que el psicólogo RODRIGO ZAMORA GOMEZ, realizó, refiriendo que se infiere que el vínculo paterno filial y materno filial están consolidados y ambos niños identifican que el conflicto se encuentra en las relaciones entre los padres, más no así manifiestan conflicto entre ellos con alguno de sus padres, por lo que la convivencia entre los niños y sus padres es altamente posible que se desarrolle sin dificultad.

Atento a lo anterior, los menores -----, y ----- tienen el derecho a la convivencia y contacto directo con ambos padres y éstos tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de los niños, en razón de la responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus deberes para con sus hijos que comprenden no sólo la formación corporal, sino espiritual, emocional y social que propicie el acrecentamiento de la capacidad de los menores.

Con base a ese interés, y con la finalidad de respetar el derecho a la igualdad, esta autoridad analizará las condiciones especiales de cada uno de los padres y que se pueden obtener del proceso, para estimar el mayor beneficio que redunde a los menores -----, y -----

Por consiguiente, al no existir impedimento ni restricción legal para alguna de las partes para que ejerzan el cuidado de sus hijos -----, y -----, esta Autoridad con fundamento en lo dispuesto por los preceptos legales invocados en párrafos que anteceden tiene a bien decretar guarda y custodia compartida, con la finalidad de que ambos padres tengan la custodia legal y física de sus hijos, lo que implica que compartirán los derechos y responsabilidades en la educación, formación, y toda actividad relacionada con la crianza de sus hijos, de manera que gozan, a través de esta resolución judicial, de

igualdad en todas las decisiones y acciones relativas a los menores de edad en igualdad de condiciones.

Así, ambos progenitores mantendrán domicilios separados y serán los menores -----, y ----- quienes cambiarán de domicilio de forma constante, en el período que más adelante se precisará, a efecto de que el progenitor al que corresponda, se haga cargo de su cuidado y asistencia.

Por tanto, la guarda y custodia, cuyo ejercicio se decreta de manera compartida, conlleva precisamente a estimar que ambos progenitores, conservan el derecho de atender y asistir a los infantes totalmente, en la proporción que les corresponda.

Resulta aplicable sobre este aspecto, la tesis jurisprudencial que se cita a continuación que es del rubro y texto siguientes: ÉPOCA. DÉCIMA.REGISTRO 2007477.INSTANCIA. Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia (s): Constitucional, Civil, Tesis: II.1o.13 C (10a.), Página: 2425:

“GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. PROTECCIÓN MÁS AMPLIA DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES. Si se toma en cuenta que la guarda y custodia única es aquella en la que el cuidado de los hijos y el deber de velar por ellos es atribuido sólo a uno de los padres, y al otro se le establece un régimen de visitas y los alimentos, lo que significa que el padre que tenga la custodia legal será quien goce de la total autoridad para decidir en los asuntos concernientes al menor que se presenten en la vida diaria; sin embargo, el interés superior de los menores se ve más protegido cuando la guarda y custodia se comparten, pues preserva una esfera de derechos más adecuada y completa para el menor, porque armoniza los legítimos derechos del padre y de la madre, sin menoscabo del bienestar de los menores y velando por el cumplimiento de sus deberes escolares y sus derechos regulados en el artículo 9 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; además, por un lado, provee a los menores de mejor calidad de vida, puesto que siempre existen dos para responder y satisfacer sus necesidades, y, por el otro, los menores establecen un fuerte lazo afectivo con ambos padres y reduce el sentimiento de pérdida que se da en los casos de divorcio y cuando se decreta la custodia única; asimismo, dota de independencia a cada uno de los padres para poder tomar acciones y decisiones en cuanto a cuestiones académicas y escolares, cuidado médico, viajes, etcétera, todas relativas al desarrollo y diario vivir del menor, con la misma autoridad y en igualdad de condiciones y circunstancias. Por ello, se debe privilegiar, en la medida de lo posible, tomando en cuenta el material probatorio desahogado, la procedencia de la custodia compartida, ya que se considera como de mejor estatus para el desarrollo de los menores.”

Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, los juicios en los que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, como el caso en que se demande la guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto esencial el interés superior de la niña y darle intervención al Ministerio Público, para que en su carácter de representante de la sociedad, vele por los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

Sirve de apoyo a lo anterior tiene sustento bajo el siguiente rubro: No. Registro: 185,753 Jurisprudencia Materia(s): Civil Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI,
Octubre de 2002 Tesis: II.3o.C. J/4 Página: 1206, intitulada:

“GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE “CONSIDERANDO EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, “NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME A LA CONVENCION “SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El derecho a la “guarda y custodia de una niña, niño y “adolescente, implica considerar no sólo las “pruebas ofrecidas por las partes con las que “pretendan demostrar una adecuada capacidad “para el cuidado del menor, sino que “atendiendo “al beneficio directo de la “infancia, el juzgador también debe considerar “el interés superior de la niña, niño y “adolescente como presupuesto esencial para “determinar quién tiene derecho a la guarda y “custodia. Ello, porque conforme a lo “dispuesto por el artículo 4o. constitucional “que establece el desarrollo integral, el “respeto a la dignidad y derechos de la niñez, “así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, “19, 20 y 27 de la Convención sobre los

"Derechos del Niño, ratificada por "México el "veintiuno de septiembre de mil novecientos "ochenta y nueve, que establece que los "Estados garantizarán que los tribunales "judiciales velen por el interés superior del "niño, los juicios en los que se vean "involucrados derechos inherentes de las "niñas, niños y adolescentes, como el caso en "que se demande la guarda y custodia, debe "tenerse como presupuesto esencial el interés "superior del niño y darle intervención al "Ministerio Público, para que en su carácter "de representante de la sociedad, vele por los "derechos de "los infantes y adolescentes."

Bajo esas condiciones, la custodia compartida se ejercerá de la siguiente manera:

El día lunes a la salida de la escuela, la señora -----, recogerá a sus menores hijos ----- y -----, de las escuelas a las que asistan, dichos menores quedarán bajo su cuidado, el resto de la semana incluyendo el sábado y el domingo, al efecto la señora -----, llevará a sus menores hijos a sus escuelas el día lunes de la siguiente semana, en la mañana para que realicen sus estudios.

Asimismo, el señor ----- recogerá a sus menores hijos a la salida de la escuela y dichos menores quedarán bajo su cuidado, el resto de la semana incluyendo el sábado y el domingo, al efecto el señor -----, llevará a sus menores hijos a sus escuelas el día lunes de la siguiente semana, en la mañana para que realicen sus estudios.

Así sucesivamente, se llevará a cabo la guarda y custodia compartida, es decir una semana completa los niños ----- y -----, estarán bajo el cuidado de su madre y la semana siguiente bajo el cuidado del padre.

Lo anterior, a fin de evitar algún posible percance o conflicto entre las partes, **haciéndoles saber a cada uno de los progenitores que deberá entregar todo lo necesario para el completo desarrollo de sus hijos, es decir, ropa, material de estudio, entre otros, y el que juzguen conveniente.**

En relación a las vacaciones de SEMANA SANTA, VERANO Y DICIEMBRE, las mismas se decretan por partes iguales para ambos contendientes de acuerdo al calendario escolar, a saber:

En el año que transcurre, corresponde a la actora, la primera mitad de las vacaciones de semana santa, de verano y las vacaciones de DICIEMBRE, y; al demandado, la segunda mitad de las vacaciones de dichos periodos.

Vacaciones que deberán alternarse año con año, es decir, para el año DOS MIL DIECINUEVE, corresponde a la actora, la primera mitad tanto de las vacaciones de SEMANA SANTA, VERANO Y DICIEMBRE, y al demandado, la segunda mitad de las vacaciones de SEMANA SANTA, VERANO Y DICIEMBRE, y así subsecuentemente, año con año.

Ello con la finalidad de lograr un acercamiento y que ambas partes puedan disfrutar de los días de asueto en compañía de sus menores hijos, aunado a que ambas partes deben contribuir a la crianza y vigilancia del desarrollo emocional y psíquico de sus hijos.

Para tal efecto ambas partes, deberán facilitar los medios necesarios para que se lleven a cabo las visitas ordenadas bajo un clima de tranquilidad para sus menores hijos, dicho término empezara a computarse una vez que cause ejecutoria la presente sentencia.

Lo anterior deberá llevarse a cabo una vez que cause ejecutoria la presente sentencia.

En virtud de lo establecido, se requiere al señor -----, para que proporcione el nombre y domicilio de las escuelas a las que asisten los niños ----- y -----, ello con la finalidad de que una vez que cause estado la presente sentencia, mediante oficio se informe a la Directora de las Escuelas, que

ambos padres están autorizados para recoger a la salida de la escuela y entregar a sus menores hijos en dichas Instituciones educativas.

Asimismo, se hace saber a las partes que el convenio provisional de fecha doce de marzo del año en curso deberá seguirse llevando a cabo hasta en tanto y cuanto cause ejecutoria la presente sentencia.

VII.- Finalmente, en atención a que el presente juicio versa sobre materia familiar, no se hace especial condenación al pago de gastos y costas.

Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Esta Autoridad ha sido competente para conocer y fallar el presente **JUICIO PRIVILEGIADO DE GUARDA Y CUSTODIA** con respecto los menores de nombres -----, y -----, promovido por -----, en contra de -----.

SEGUNDO. La parte actora -----, **NO** probó su acción.

TERCERO. Se decreta la guarda y custodia compartida de los menores -----, y -----, en la forma y términos establecidos en el cuerpo de esta resolución.

CUARTO. El incidente penal propuesto por -----, resultó improcedente.

QUINTO.- Por ser un asunto de carácter familiar, no se realiza condenación de gastos y costas del presente juicio.

NOTIFIQUESE EN FORMA DOMICILIARIA A LAS PARTES.

Así, lo sentenció y firma, la Abogada **MARÍA CARRASCO SANDOVAL**, Juez Primero de lo Familiar, ante la Secretaria con quien actúa, que autoriza y firma, Abogada **MARIA DEL PILAR LOEZA GONZALEZ. DOY FE.**
EXPEDIENTE -----/2018 L'MCS/LMP*

ABOGADA MARÍA CARRASCO SANDOVAL.
JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR.

ABOGADA MARIA DEL PILAR LOEZA GONZALEZ.
SECRETARIA DE ACUERDOS.